

Rosa Icela confía que habrá justicia; oposición e Iglesia lanzan críticas

DE LA REDACCIÓN

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresó su condena tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, y se solidarizó con los familiares de éste.

"Condenamos y lamentamos el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Toda nuestra solidaridad con sus seres queridos. Confiamos en que las investigaciones del caso lleven a la justicia", señaló en redes sociales la funcionaria federal, quien acudió a la reunión convocada a primera hora de ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el gabinete de seguridad federal.

El atentado cometido la noche del pasado sábado también causó reacciones entre los partidos políticos nacionales, quienes coincidieron en que se haga justicia.

Además, la mesa directiva de la Cámara de Diputados también lamentó el homicidio y apremió a las autoridades al esclarecimiento de los hechos, y al castigo de los responsables. La dirigencia nacional de Morena expuso que "la violencia nunca será el camino: seguiremos trabajando por la paz, la justicia y el fortalecimiento de los municipios en nuestro país".

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, afirmó que el asesinato del edil no se trata de un hecho aislado, sino de "un reflejo del abandono y la indiferencia del Estado frente a la violencia que golpea a miles de familias mexicanas".

Declaró que se trató de un atentado contra quien levanta la voz por el secuestro del país. "Una vez más, contra quien pidió ayuda al gobierno y no fue escuchado". Tras demandar justicia inmediata, dijo que "la inseguridad no distingue colores ni partidos. Hoy las familias viven con miedo, en Michoacán, en Veracruz, en Zacatecas, en Sinaloa, en Guerrero, en todo México".

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, escribió en redes sociales que a Manzo "lo mataron a plena vista, en un acto cobarde y brutal que muestra hasta dónde ha llegado la violencia en nuestro país". Agregó que "es la muestra más clara de que en México, el que se opone al crimen organizado pone en riesgo su vida. Exigimos justicia inmediata, castigo ejemplar y que el gobierno federal deje de mirar hacia otro lado. No más excusas".

En tanto, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que hace más de un mes, desde la Cámara de Diputados, se hizo un llamado formal a atender las solicitudes del edil. Mientras, el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, recalcó que la muerte de Manzo debe obligar a las autoridades a corregir la estrategia y su respuesta para proteger a quienes defienden a sus comunidades.

CEM también llama a combatir grupos armados

La investigación de los crímenes que se cometen en el país es insuficiente. Se debe "combatir con determinación la causa" de los asesinatos, que es la "presencia ordinaria de grupos armados, que controlan la vida pública en varias regiones del país", afirmó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

También es necesario hacer frente a los retenes en carreteras, el despojo de tierras, las amenazas constantes a los productores, comerciantes y gobernantes. Estos flagelos "reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional que los gobiernos" federal, estatales y municipales están obligados a garantizar, enfatizó.

La jerarquía católica insistió en su exigencia a las autoridades para que se combata "con determinación e inteligencia el verdadero crimen, que no es solamente la trágica e indignante muerte de un comerciante o un alcalde, como fueron Bernardo Bravo (líder de los productores de limón) y Carlos Manzo, sino la vida amenazada de miles de ciudadanos que día con día ven ultrajadas sus libertades".

En un comunicado, la CEM exhortó a "todos los mexicanos que están provocando esta violencia fratricida a detenerla y respetar la vida de todos".